

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. - ORAL
SECCIÓN SEGUNDA**

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022)

PROCESO	11001-33-35-029-2021-00067 00
DEMANDANTE	OSCAR GONZALO PAIBA TIBADUIZA
DEMANDADO	NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS EN LIQUIDACIÓN Y OTROS
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
CONTROVERSIA	REINTEGRO MAYOR VALOR PENSIÓN DE JUBILACIÓN

OBJETO

De conformidad con lo establecido en el artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, y teniendo en cuenta que, en cumplimiento de lo ordenado en la audiencia inicial desarrollada dentro del proceso de la referencia (archivo "17ActaAudiencialInicial.pdf" - fol. 04), las entidades vinculadas presentaron sendos escritos de contestación de demanda, se procede a proveer lo que corresponde.

ANTECEDENTES

El señor **OSCAR GONZALO PAIBA TIBADUIZA** promueve el presente proceso en contra de la **FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS EN LIQUIDACIÓN** y de la **NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO** (archivo "01DemandayAnexos.pdf") en con miras a que se acceda a las siguientes pretensiones:

1. Que se declare la nulidad del oficio UGF-2- 1715/015 del 6 de octubre de 2015, expedido por la Unidad de gestión Financiera de la Fundación San Juan de Dios en Liquidación.
2. Que se declare la nulidad del oficio UGF-2- 158/2016 del 18 de febrero de 2016, expedido por la Unidad de Gestión Financiera de la Fundación San Juan de Dios en liquidación.
3. Que se declare la nulidad del acto ficto o presunto que debió dictar el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la reclamación administrativa de derechos laborales, contenida en oficio de fecha 7 de diciembre de 2015, suscrito por OSCAR GONZALO RAIBA TIBADUIZA.
4. Que como consecuencia de la nulidad de los precitados actos administrativos se ordene a la Fundación San Juan De Dios en liquidación y a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que del retroactivo de la pensión de vejez cancelado por Colpensiones a la Fundación San Juan de Dios, según resolución GNR 227660 del 28 de julio de 2015, por el tiempo comprendido entre el 26 de enero de 2011 y el 31 de julio de 2015, reintegre al actor, el mayor valor entre la pensión de jubilación cancelada por la Fundación San Juan de Dios - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el valor pagado por Colpensiones, por cuanto la compartibilidad pensional llega hasta el ciento por ciento (100%) del valor que paga la empresa, pero no puede afectar el mayor valor de la pensión de vejez, que corresponde al ex trabajador jubilado.

5. Que como consecuencia de la nulidad de los precitados actos administrativos se ordene a la Fundación San Juan De Dios en liquidación y a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público el pago de la mesada 14, de la pensión de jubilación, reconocida por resolución 0009 de 2001, a OSCAR GONZALO PAIBA TIBADUIZA, a partir de junio de 2016 y en adelante, año por año, por constituir un derecho adquirido, teniendo en cuenta que la pensión se causó con anterioridad al acto legislativo número 1 de 2005 y que no será cancelada por Colpensiones considerando que el ex trabajador jubilado reunió los requisitos para la pensión de vejez, con posterioridad a la vigencia del acto legislativo 01 del 2005.
6. Se condene al pago de los intereses moratorios o, en subsidio, la indexación sobre las sumas adeudadas y la mesada adicional 14.
7. Que se condene a los demandados en las costas, que genere la presente acción.

El 13 de octubre de 2016, el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección A, admitió la demanda (archivo "03AutoAdmisorioTAC.pdf") en contra de la **NACIÓN -MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS EN LIQUIDACIÓN** y, mediante proveído del 19 de junio de 2020 (archivo "10AutoDeclaraFaltaCompetencia.pdf") declaró la falta de competencia por el factor cuantía, ordenando en consecuencia, remitirlo al Centro de Servicios de los Juzgados Administrativos de Bogotá; habiendo avanzado dicho proceso hasta el traslado de excepciones propuestas el 11 de julio de 2017, con pronunciamiento de la parte actora el día 14 del mismo mes y año.

De conformidad con el reparto que se efectuara el 11 de marzo de 2021, (archivo "12ActaReparto.pdf") correspondió el asunto a esta sede judicial; por lo que, mediante providencia del 25 de marzo de 2021, se avocó conocimiento (archivo "14AutoAvocaCompetencia.pdf") y, por medio de auto del 01 de julio de 2021 (archivo "16AutoFijaFechaAudInicial.pdf") se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011; diligencia que tuvo lugar el 23 de agosto de 2021 (archivo "17ActaAudiencialInicial.pdf") habiendo surtido la etapa de saneamiento, ordenando **vincular** al **DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**; a la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA** y a **BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL** y, tener como **notificada** desde ese momento a la **NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**, en atención a que argumentó que, solo hasta la citación a audiencia tuvo conocimiento de la demanda.

Integrado el contradictorio, las entidades presentaron sendos escritos de contestación de demanda; respecto de los cuales, conforme a la etapa que corresponde al presente pronunciamiento; a continuación se citarán las **EXCEPCIONES** deben ser abordadas en este momento procesal, así como el pronunciamiento que frente a las mismas efectuó el apoderado del demandante al momento de descorrer el traslado que para el efecto se le efectuara por parte del Secretario el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A, como consta en el archivo "06ContestacionExcepciones.pdf"; así como el que esta sede judicial a su turno efectuó como consta en el Informe Secretarial del 17 de enero de 2022, que reposa en el archivo "35InformeDespacho.pdf"; haciendo la salvedad que, dentro de las actuaciones surtidas ante el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de las dos entidades hasta entonces demandadas, solo la Fundación San Juan de Dios en Liquidación contestó la demanda, en tanto que, como se anotó en precedencia, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público guardó silencio, viniendo a contestar la demanda cuando el proceso fue asignado por reparto a este Despacho.

**CONJUNTO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA EXTINTA FUNDACIÓN SAN
JUAN DE DIOS - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - INSTITUTO MATERNO INFANTIL**

(Archivo "05ContestacionyAnexos.pdf")

- **No comprender la demanda todos los Litisconsortes** Necesarios: solicitando la vinculación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, del Departamento de Cundinamarca y de la Beneficencia de Cundinamarca. Frente a este medio exceptivo, el apoderado del demandante señaló que no tiene ningún fundamento, teniendo en cuenta que no se aspira al pago de sumas líquidas de la relación laboral con el Hospital San Juan de Dios. (Archivo "06ContestacionExcepciones.pdf")
- **Improcedencia de demandar documentos que no se constituyen en actos administrativos:** excepción que se sustenta en que los oficios demandados fueron expedidos sin competencia, por tratarse de contratistas y que, por lo tanto, entraña una inepta demanda. Al respecto, el apoderado del demandante aduce puntualmente que: *"los actos demandados son verdaderos actos administrativos, tal como lo ha sostenido de manera pacífica la jurisprudencia permanente y pacífica del H. Consejo de Estado, ya que se trata de la manifestación de la voluntad de la administración. Aceptar el peregrino argumento del demandado sobre una supuesta falta de competencia, sería convalidar un simple argumento de defensa, en perjuicio de los claros derechos de mi representado"*. (Archivo "06ContestacionExcepciones.pdf")

NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

(Archivo "26ContestacionDemanda.pdf")

- **Ineptitud sustantiva de la demanda por demandar acto administrativo de trámite:** fundamentada en que el oficio 2-2016-018270 de 19 de mayo de 2016, suscrito por una funcionaria de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es un mero acto de trámite informativo y por consiguiente, no susceptible de control jurisdiccional, toda vez que con el mismo no se resolvió ninguna situación jurídica de fondo. Frente a este medio exceptivo el demandante señaló que: "Se demandó el acto ficto o presunto que debió haber expedido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ya que el oficio citado No. 2-2016-018270 del 19 de mayo de 2016, no fue recibido por mi poderdante y hasta ahora lo conoce con ocasión de la contestación de la demanda". (Archivo "32DescorreExcepciones.pdf")

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA

(Archivo "29ContestacionUAEPC.pdf")

- **Inexistencia de un acto administrativo / Improcedencia de demandar actos administrativos de trámite, preparatorios o de ejecución:** basada en que los oficios demandados se erigen como meros actos de trámite no susceptibles de control por medio de la acción de nulidad, dado que no son de carácter definitivo que pongan fin a una actuación administrativa. Al respecto, el apoderado del demandante, al descorrer el correspondiente traslado argumentó que: "*los actos demandados son verdaderos actos administrativos, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia permanente y pacífica del H. Consejo de Estado, ya que se trata de la manifestación de la voluntad de la administración. Aceptar lo propuesto sería convalidar un simple argumento de defensa, en perjuicio de los claros derechos de mi*

representado” y que “Los actos demandados son definitivos y contra los mismos no se señaló la procedencia de recurso alguno”. (Archivo “33DescorreExcepciones.pdf”)

- **Falta de legitimación en la causa por pasiva:** en razón a que, “si bien, el Decreto No. 0306 de 2017 trasladó a la Gobernación de Cundinamarca las competencias funcionales relacionadas con el cierre del proceso liquidatorio del conjunto de derechos y obligaciones de la extinta Fundación San Juan de Dios – Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil y así mismo, se asignó a la Unidad la representación en procesos laborales y la función pensional con posterioridad a la etapa post liquidatorio, las funciones pensionales asignadas a la Unidad están relacionadas con las pensiones causadas hasta el 31 de octubre de 1993, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de dicho decreto y la pensión de jubilación reconocida al señor PAIBA TIBADUIZA es del año 2001, por lo cual entonces, resulta evidente que, la Unidad carece de legitimación para oponerse a las pretensiones ventiladas en la demanda”. Frente a esta excepción, el apoderado del demandante argumentó que la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca sí está llamada a responder en este proceso teniendo en cuenta que, si bien por medio de la Resolución 4402 del 7 de diciembre de 2016, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ordenó reintegrar y pagar la porción del retroactivo pensional girado por Colpensiones, que le correspondía al demandante, también se debe lo correspondiente a los intereses moratorios y/o la indexación, por el tiempo comprendido entre el recibo del retroactivo y la fecha de pago al demandante, tal como se solicita en la pretensión número 6 de la demanda; en donde, este retroactivo incluyó las mesadas pensionales desde el mes de enero de 2011 hasta agosto de 2015

incluidas las dos (2) mesadas adicionales de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y la mesada adicional número 14 de junio de 2015.

En el mismo sentido, precisó que, la Resolución 2311 del 2 de agosto de 2017, proferida por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, por medio de la cual se reconoce al demandante la mesada adicional número 14, de junio de cada año, no fue de conocimiento de su representado, ya que ni le fue comunicada, ni le fue notificada y que, además él le informa que no ha recibido pago alguno por este concepto, de lo cual deriva que aún se le adeudan, con los respectivos intereses y/o indexación, las mesadas adicionales de junio de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y hacia el futuro y que, adicionalmente, la Resolución 2311 de 2017 reconoce a su poderdante la suma de \$3'648.190 que supuestamente cubre la mesada adicional de junio de 2017, valor que califica de inexacto, dado que para esa misma fecha el valor de la prestación ascendía a la suma de \$3'714.245; de lo cual deriva que al Ministerio de Hacienda y Crédito Público le corresponde probar en qué fechas, montos y a qué cuenta pagó la mesada adicional número 14, de junio de cada año, su representado; por lo que según su entender, no es cierto que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público haya cumplido los pagos pretendidos. (Archivo "33DescorreExcepciones.pdf")

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

(Archivo "28ContestacionDepartamentoC.pdf")

- **Falta de Integración de la "litis Consortio Necesario":** con sustento en que, conforme a la sentencia SU 484 del 15 de mayo de 2008 proferida

por la Corte Constitucional, al presente asunto debe ser vinculada la Beneficencia de Cundinamarca para que ejerza su derecho de defensa.

- **Falta de legitimación para ser demandada:** en atención a que, “el demandante jamás ha tenido relación laboral alguna con el Departamento de Cundinamarca sino con El Hospital San Juan de Dios regentado por la Dirección de la Fundación San Juan de Dios, máxime si tenemos en cuenta que la Fundación San Juan de Dios es una entidad de utilidad común de naturaleza privada”.

BOGOTÁ – DISTRITO CAPITAL – SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD

(Archivo “25ContestacionDemandaSecretariaDis.pdf”)

- **Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva que absuelve de toda culpa y responsabilidad en el asunto a Bogotá, Distrito Capital-Secretaria Distrital de Salud:** basada en que, los hechos aludidos con la demanda no involucran ni comprometen a esta entidad, pues los actos administrativos respecto de los cuales se pide se declare su nulidad no fueron expedidos por esta entidad, ni tampoco tuvo participación en su formación o trámite que se demuestre, ni hace parte de la estructura, ni depende funcionalmente de las demás entidades demandadas; de manera que no existe relación de causalidad entre los hechos señalados y el presunto daño o perjuicio que se irroga con la demanda, como quiera que el “presunto” daño ocasionado al demandante no fue generado por personal vinculado a la entidad y tampoco dieron lugar por su acción u omisión, ni en su instalaciones.
- **Inepta demanda por falta de requisitos formales:** por cuanto, la parte actora no determina con la demanda, con precisión y claridad

directa las razones de hecho y de derecho y menos ninguna pretensión con soporte probatorio en contra de esta entidad, que la involucren, responsabilicen, tal como lo exige para la presentación de la demanda el numeral 2 9, 3 10 y 4 11 del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011.

CONSIDERACIONES

El artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, establece que las **excepciones previas** se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 de la Ley 1564 de 2012, preceptos según los cuales, de tales excepciones se correrá traslado a la parte demandante por el término de tres días conforme al artículo 110 del mismo código para que se pronuncie sobre ellas y si fuere el caso, subsane los defectos anotados.

Así mismo, las referidas disposiciones prevén que, si, para resolver las excepciones previas no se requiere la práctica de pruebas, **el juez deberá resolverlas antes de la audiencia inicial** y, en caso contrario, en el auto por el cual cite a la audiencia inicial decretará las respectivas pruebas que se practicarán en la diligencia para resolver lo que corresponda en la misma oportunidad.

Es pertinente destacar que el numeral 2º del citado artículo 101 determina que, si prospera alguna de las excepciones que **impida continuar con el trámite del proceso y que no pueda ser subsanada o no lo haya sido oportunamente**, se declarará terminada la actuación y se ordenará devolver la demanda al demandante.

Frente a lo anterior, se recuerda que, por haberse surtido una primera parte de la audiencia inicial con solo dos entidades demandadas, habiendo ordenado vincular a las demás, es forzoso concluir que, esa audiencia no se ha agotado en su

totalidad, por lo que, de manera previa a fijar fecha para su reanudación, se deben decidir las excepciones que conforme al momento procesal que nos encontramos, presentaron las entidades cuya vinculación se ordenó en esa primera parte de la diligencia.

Lo anterior, al margen de las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva que algunas de las demandadas propusieron; teniendo en cuenta que, se insiste, lo primero que se debe definir es la naturaleza jurídica de los actos demandados, esto es, si son o no, objeto de control judicial, para solo entonces; pasar a definir los demás medios propuestos, por cuanto, de llegarse a concluir que los actos demandados no son susceptibles de control judicial y que la situación no es subsanable, es decir, a falta de un presupuesto angular y determinante de la demanda, no sería necesario pronunciarse sobre otros puntos alegados por las partes.

En concordancia con lo anterior, es oportuno recordar que el **objetivo** de las excepciones previas enlistadas en el artículo 100 del Código General del Proceso no es otro que dar la oportunidad para corregir las deficiencias de carácter formal que pudieren llegar al impedir el conocimiento del asunto.

Retomando entonces lo que podríamos denominar presupuestos para proponer la excepción previa de **Ineptitud de la demanda** para el caso objeto de estudio, nos centraremos en la que versa sobre la **falta de requisitos formales**; esto, en razón a que el debate suscitado entre las partes se presenta en cuanto a si los actos administrativos demandados tienen ese carácter o por el contrario, no son objeto de control judicial por tratarse de actos de trámite, ejecución o mera comunicación.

Para definir el tema, debe señalarse que, de acuerdo con los artículo 162 – numeral 4º y 163 de la Ley 1437 de 2011, el **acto administrativo** cuya nulidad se solicita en procesos como el que nos ocupa, se **debe individualizar con toda precisión**; de manera que, si lo que se está demandando no se erige como un acto administrativo

propiamente dicho, se configura la excepción de ineptitud de la demanda por falta de requisitos de la demanda; en donde, no debe perderse de vista que, existen presupuestos de hecho que permiten una subsanación, como por ejemplo, cuando no sea han demandado todos los actos que definen la situación del demandante. No obstante, cuando aún no existe ese acto administrativo propiamente dicho que define la situación particular, porque se está demandando una mera información de cómo se procederá, la situación se torna insaneable.

En este punto, se considera pertinente traer a colación el Auto Interlocutorio del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección A, del 14 de mayo de 2020, Consejero Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas - Radicación 25000-23-42-000-2017-06031-01(5554-18), en el que, en sede de recurso de apelación; luego de recordar el concepto y características del acto administrativo, en aras de hacer énfasis que solo ellos son objeto de control jurisdiccional; explicó lo siguiente:

“El acto administrativo es toda manifestación de voluntad de una entidad pública, o de un particular en ejercicio de funciones públicas, capaz de producir efectos jurídicos. En consonancia con esta definición, se han identificado las siguientes características del acto administrativo:

- i) Constituye una declaración unilateral de voluntad;
- ii) Se expide en ejercicio de la función administrativa, por parte de una autoridad estatal o de particulares;
- iii) Se encamina a producir efectos jurídicos «por sí misma, de manera directa sobre el asunto o la situación jurídica de que se trate y, por ende, vinculante»;
- iv) Los efectos del acto administrativo consisten en la creación, modificación o extinción de una situación jurídica general o particular, que impacta los derechos u

obligaciones de los asociados, «sean subjetivos, personales, reales o de crédito»

Igualmente, esta corporación ha precisado que los actos administrativos pasibles de control jurisdiccional son aquellos catalogados como definitivos, esto es, **«los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación» (...)**

La jurisdicción de lo contencioso administrativo únicamente se ocupa del estudio de los actos definitivos, expresos o fictos, que **culminen un proceso administrativo**, en la medida en que se presumen legales, gozan de los atributos de ejecutividad y ejecutoriedad e impactan en las relaciones de las personas naturales y jurídicas, sus derechos y obligaciones. En consecuencia, el control judicial de las decisiones administrativas definitivas se torna obligatorio dentro de un Estado Social de Derecho, en aras de garantizar su validez, así como los valores constitucionales, el imperio del principio de legalidad y los derechos subjetivos de los asociados. (...). **Los actos administrativos de ejecución solo serán enjuiciables cuando creen, modifiquen o extingan una situación jurídica particular, aspectos que lo convierten en un acto administrativo susceptible de control ante esta jurisdicción"**

DEL CASO EN CONCRETO

Sea lo primero advertir que no encuentra esta instancia judicial la necesidad de practicar prueba alguna para resolver el medio exceptivo de naturaleza previa propuesto, por lo que se procede a resolver de plano en el presente proveído.

Para el efecto, resulta inminente analizar los actos administrativos demandados, como sigue:

Oficio UGF-2- 1715/015 del 6 de octubre de 2015, obrante en el archivo "01DemandayAnexos.pdf"- fols. 37 y 38), expedido por la Unidad de Gestión Financiera de la Fundación San Juan de Dios en Liquidación; dirigido al apoderado del demandante, por medio del cual se le informa que, en atención a la comunicación radicada dentro del proceso liquidatorio, el 21 de septiembre de 2015 bajo el radicado 1739, se le da respuesta en los siguientes términos:

*"En cuanto a su petición que se **realice el pago** de "las mesadas pensionales correspondientes a los meses de mayo, junio y julio de 2015, considerando que Colpensiones solo me incluyó a partir de agosto de 2015.", le **informamos** que verificadas las nóminas pagadas por el Fondo del Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia para los meses mayo, junio, adicional de junio y julio de 2015, se le ordenó realizar el pago por valor neto de \$ 11.872.394,00, por lo anterior, le solicitamos **se acerque** al Fondo de Ferrocarriles para que le brinde información de la fecha y forma de pago para cada uno de los periodos mencionados.*

2. Al punto dos de su comunicación le **informamos** lo siguiente:

Si bien es cierto realizó aportes pensionales con el empleador E.S.E. Hospital de Fontibón, no tenemos certeza si usted obtuvo reconocimiento de pensión de jubilación con el mencionado Hospital, razón por la cual se conoce que el único empleador que le reconoció

pensión de jubilación fue el Hospital San Juan de Dios hoy en Liquidación; por tanto los aportes realizados con otros empleadores constituyen aportes por otros ingresos originados de una relación laboral que permiten un incremento en el Ingreso Base de Liquidación (IBL), de conformidad con lo reglado en el artículo 10 de la Ley 797 de 2003. En este orden de ideas, el giro del retroactivo pagado por Colpensiones, corresponde a mesadas pensionales que asumió la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público desde el 26 de febrero de 2011 hasta el 31 de agosto de 2015, sin embargo y de acuerdo con el artículo séptimo de la Resolución GNR227660 de 28 de julio de 2015, este proceso liquidatorio validará y analizará en conjunto con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público si se debe realizar una devolución con destine al FONCEP.

3. En cuanto "El pago de la mesada 14, de junio de cada año, que se constituye en un derecho adquirido, teniendo en cuenta que la pensión de jubilación se causó con anterioridad al acto legislativo número 1 de 2005, es necesario informarle que adicional a la consulta realizada al Ministerio de Salud y Protección Social, hemos solicitado al Ministerio de Trabajo, realice un análisis jurídico y técnico, el cual permita que este proceso liquidatorio actúe en Derecho sin perjuicio de incumplir las normas y/o decretos que en materia pensional rigen en Colombia, una vez estas Carteras Ministeriales se pronuncien sobre la consulta realizada, procederemos a notificar la respuesta y la decisión adoptada por este proceso concursal.

4. A su petición "Los intereses moratorios o la indexación sobre las sumas adeudadas", informamos que esta petición no es procedente, toda vez que Usted fue excluido de la nómina de jubilados hasta el mes de septiembre de 2015, por lo tanto, el Fondo del **Pasivo Social de**

Ferrocarriles Nacionales de Colombia le deberá informar sobre el pago de las mesadas de mayo, junio, adicional de junio y julio de 2015 (...)

Negrilla y subrayado del Despacho

Como puede observarse, el anterior oficio está lejos de contener una respuesta definitiva frente a una situación jurídica particular que lo haga susceptible de control judicial, pues, tal como lo expresan las demandadas, al petitionerario se le está dando una información de cómo debe proceder, del competente para dirimirla de fondo y de las actuaciones que la entidad ha adelantado, sin que se trate, se reitera, de una respuesta definitiva que entrañe un acto administrativo propiamente dicho.

Oficio UGF-2- 158/2016 del 18 de febrero de 2016, expedido por la Unidad de Gestión Financiera de la Fundación San Juan de Dios en liquidación.

(Archivo "01DemandayAnexos.pdf"- fols. 47 a 49), expedido por la Unidad de Gestión Financiera de la Fundación San Juan de Dios en Liquidación; dirigido al apoderado del demandante, por medio del cual se le informa que, en atención a la comunicación radicada dentro del proceso liquidatorio, el 07 de diciembre de 2015, a la cual se le solicitó ampliación de términos a través de comunicación UGF-22085/015 el día 23 de diciembre de 2015, se le **informa** que "su caso será analizado y evaluado en la mesa de seguimiento que se realiza ante en la Procuraduría General de la Nación ante los Procuradores Delegados Para la Conciliación Administrativa y Asuntos Laborales y Seguridad Social". Lo anterior, toda vez que se deberá consultar ante ese Ministerio Público la viabilidad de continuar realizando los pagos de la mesada adicional de junio (mesada 14), puesto que de conformidad con los conceptos proferidos por Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Protección Social, conceptuaron en la normatividad legal vigente en Colombia para los reconocimientos de pensión de vejez. En consecuencia, y con el fin de definir el valor a reintegrar por concepto de pago de retroactivo pensional pagado a la Nación por

Colpensiones, se ha consultado con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la viabilidad de establecer una mesa de trabajo para definir la metodología de cálculo de las cotizaciones por aportes en pensiones que posteriormente se le deberán reintegrar a su nombre. Finalmente, y con el fin de atender su petición es necesario informarle que una vez se defina su caso en mesas de trabajo de la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Hacienda, **procederemos a informarle sobre las decisiones que se tomen respecto de su caso**"

Nótese que, en este caso, al igual que el anterior, se le informa al peticionario que en orden a dar la respuesta definitiva se acudirá a dos entidades, Procuraduría General de la Nación y una cartera Ministerial, en donde, fruto de las mesas de trabajo que para el efecto se proponen adelantar de manera conjunta con dichas entidades, se le informará sobre la decisión que finalmente se tome, con lo cual queda demostrado que no nos encontramos frente a un acto administrativo que pueda ser controvertido judicialmente.

Acto ficto o presunto que debió dictar el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la reclamación administrativa de derechos laborales, contenida en oficio de fecha 7 de diciembre de 2015, suscrito por el señor Oscar Gonzalo Paiba Tibaduiza. Para establecer lo pertinente frente a este presunto acto ficto, debe traerse a colación la **petición** que se invoca como desatendida y que originó el alegado silencio administrativo; la cual obra en el (Archivo "01DemandayAnexos.pdf"- fols. 51 a 66), en el que se solicitó: "Que del retroactivo pensional cancelado por Colpensiones a la Fundación San Juan de Dios, por el tiempo comprendido entre el 26 de enero de 2011 y el 31 de julio de. 2015, se descuenten los valores pagados por la Fundación San Juan de Dios - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a título de pensión de jubilación y la diferencia me sea devuelta, considerando que mi pensión de vejez tuvo un valor muy superior al de la jubilación, por cuanto

para la liquidación de la pensión de vejez Colpensiones tuvo en cuenta los aportes que realice adicionalmente con el Hospital de Fontibón ESE, de la Secretaria Distrital de Salud (...) El pago de la mesada 14; a partir de junio de 2016, que se constituye en un derecho adquirido, teniendo en cuenta que la pensión de jubilación se causó con anterioridad al acto legislativo número 1 de 2005 y que no me será cancelada por Colpensiones considerando que reuní los requisitos para la pensión de vejez, con posterioridad a la vigencia del acto legislativo 01 del 2005. 3. Los intereses moratorios o la indexación sobre las sumas adeudadas".

Con relación a lo anterior, se recuerda que la entidad, al momento de contestar la demanda demuestra que a esta petición se dio respuesta mediante oficio del **19 de mayo de 2016, mediante oficio radicado 2-2016-018270**; por lo que habiéndose presentado la demanda de manera posterior, **esto el 26 de julio de 2016**((Archivo "00Portada.pdf")), mal podría aceptarse que se demande un acto ficto generado de un silencio administrativo que no se materializó.

Al margen de lo anterior, debe señalarse que esta sede comparte los planteamientos de la entidad en cuanto a que la respuesta emitida, de la cual el demandante adujo no haber tenido conocimiento; tampoco se erige como un acto administrativo sino como uno de trámite, en el que se le informa al peticionario que a su solicitud se le ha dado traslado al competente.

De acuerdo a todo lo expuesto, el Despacho reitera que, frente a los dos oficios demandados y a lo que el actor consideró un "acto presunto", se configura la excepción previa de inepta demanda; de manera que, aun cuando por regla general, este tipo de medios exceptivos es saneable, en el presente caso, no es viable superar la situación, por cuanto como se indicó en líneas precedentes es claro que al demandante se le está dando una información de la manera en que se atenderán sus solicitudes, sin que haya lugar a predicar la existencia de un acto administrativo compuesto o que exista una proposición jurídica incompleta, que por ejemplo,

cuando se demanda un acto principal y se omite atacar los actos por los cuales se resuelve algún recurso presentado en su contra; caso en el cual, la jurisprudencia del Consejo de Estado en aras de garantizar el derecho al acceso a la administración de justicia ha dado vía para que se entiendan demandados todos los actos.

En consecuencia, a la fecha no resulta viable que el demandante “subsane” y proceda a individualizar los actos que realmente resolvieron sus peticiones de manera definitiva para que demande los actos administrativos correspondientes que hagan viable que se adelante el respectivo control jurisdiccional. Por consiguiente, continuar con el proceso ante este impedimento procesal no resulta procedente y por lo tanto, se declarará probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisitos formales de acuerdo al numeral 5º del artículo 100 del C.G.P., por indebida individualización de los actos administrativos a demandar y por lo tanto, se declarará terminado el proceso.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado 29 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARA PROBADA la excepción de **INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA POR FALTA DE LOS REQUISITOS FORMALES**, del presente medio de control, acuerdo con la parte considerativa de este proveído. En consecuencia, **DECLARAR TERMINADO** el presente proceso.

SEGUNDO: Sin condena en costas y agencias en derecho a la parte demandante, por no encontrarse acreditada temeridad o mala fe.

TERCERO: En los términos del poder obrante en el archivo “28ContestacionDepartamentoC.pdf” se **RECONOCE PERSONERÍA** al abogado **JOSELITO RIAÑO BARRAGÁN**, identificado con cédula de ciudadanía

19.306.469 y portador de la tarjeta profesional 74.864 del C.S.J., como apoderado del **DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** y, de acuerdo al memorial contenido en el archivo “37RenunciaPoder.pdf”, se **ACEPTA** su **RENUNCIA**; al tiempo que, de acuerdo al memorial que reposa en el archivo “39AportaPoder.pdf”; se **RECONOCE PERSONERÍA** a la abogada **MARÍA DORIS CASAS UBAQUE**, identificada con cédula de ciudadanía 51.900.471 y portadora de la tarjeta profesional 108. 395 del C.S.J., como apoderada de la citada entidad / En los términos del poder obrante en el “Archivo30Poder.pdf” se **RECONOCE PERSONERÍA** a la abogada **LIZETH MARÍA GUZMÁN FRANCO**, identificada con cédula de ciudadanía 1.116.250.012 y portadora de la tarjeta profesional 238.513 del C.S.J., como apoderada de **BOGOTÁ – DISTRITO CAPITAL** y, de acuerdo al memorial contenido en el archivo “34RenunciaPoder.pdf”, se **ACEPTA** su **RENUNCIA** y, de acuerdo al memorial que reposa en el archivo “36Poder.pdf” (fol. 04) ; se **RECONOCE PERSONERÍA** al abogado **DAVID HERNANDO VARGAS MORALES**, identificado con cédula de ciudadanía 83.169.105 y portador de la tarjeta profesional 114. 244 del C.S.J., como apoderado de la citada entidad / De acuerdo al poder obrante en el archivo “24Poder.pdf” - (fol. 03) se **RECONOCE PERSONERÍA** al abogado **HERNÁN MIRANDA ABAÚNZA**, identificado con cédula de ciudadanía 80.182.598 y portador de la tarjeta profesional 140.635 del C.S.J., como apoderado de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** / Conforme memorial que reposa en el archivo “25ContestacionDemanda.pdf” (fol. 18); se **RECONOCE PERSONERÍA** al abogado **AGUSTIN SALAMANCA ORDOÑEZ**, identificado con cédula de ciudadanía 79.306.177 y portador de la tarjeta profesional 83.260 del C.S.J como apoderado de **BOGOTÁ – DISTRITO CAPITAL – SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD** y, de acuerdo al memorial contenido en el archivo “38RenunciaPoder.pdf”, se **ACEPTA** su **RENUNCIA** y, según memorial que reposa en el archivo “40PoderyAnexos.pdf”; se **RECONOCE PERSONERÍA** a las abogadas **LUZ ALBA FARFAN CASALLAS**, identificada con cédula de ciudadanía 33.369.593 y portadora de la tarjeta profesional 205.439 del C.S.J. y

BLANCA MYRIAM VARGAS SUNCE, identificada con cedula de ciudadanía 79.897.756 y portadora de la tarjeta profesional 192.663 del C.S.J., como apoderadas de la citada entidad.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría liquídense los gastos del proceso, si los hay y **ARCHÍVESE** el expediente.

NOTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESEA Y CÚMPLASE



ENRIQUE ARCOS ALVEAR
JUEZ

MV

PARTES	CORREOS ELECTRÓNICOS
DEMANDANTE: OSCAR GONZALO PAIBA RIBADUIZA	<u>carlosramirezmaya@hotmail.com</u>
DEMANDADAS Conjunto de Derechos y Obligaciones de la extinta Fundación San Juan de Dios y Hospitales San Juan de Dios e	Calle 87 No. 15 – 23 Oficina 603 de Bogotá

<p>Instituto Materno Infantil en liquidación.</p> <p>Departamento de Cundinamarca</p> <p>Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público</p> <p>Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca</p> <p>Secretaría Distrital de Salud de Bogotá</p>	<p>mdcasas@cundinamarca.gov.co maría.casas@cundinamarca.gov.co notijudicial_bene@cundinamarca.gov.co</p> <p>notificacionesjudiciales@minhacienda.gov.co</p> <p>hernan.miranda@cundinamarca.gov.co hernanmiranda81@gmail.com</p> <p>notificacionjudicial@saludcapital.gov.co alalamanca@saludcapital.gov.co</p>
<p>MINISTERIO PÚBLICO: PROCURADOR 191 JUDICIAL PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS</p>	<p>Procjudadm191@procuraduria.gov.co iquinones@procuraduria.gov.co</p>